

Antes de que los *hombres de negro* aterricen en España y borren del mapa a las Cajas de Ahorros, la clase política apura para mantener su cuota de poder en las asambleas y los consejos de administración, convertidos en su último reducto. Los partidos siguen luchando por meter a los suyos en las estas entidades, que hoy por hoy siguen llenas de cargos electos, de amigos y familiares afines,

a pesar de estar vacías de competencias y dedicarse casi en exclusiva a gestionar la Obra Social. De la primera reforma financiera, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, salió el compromiso de despolitizar el sector. El objetivo se ha quedado sin cumplir, ya que prácticamente sólo lo están aplicando los bancos. Pero todo lo bueno se acaba.

Un año después de cambiar la ley para profesionalizar la gestión, más de 200 cargos electos permanecen en los Consejos

Los políticos se atrincheran en las Cajas



Rodrigo Rato sigue siendo presidente de Caja Madrid, mientras que José Luis Olivas tuvo que dimitir como presidente de Bancaja.

BANKIA

■ Esmeralda Gayán

Hay cosas que no cambian. Con España prácticamente intervenida y la prima de riesgo por las nubes, todavía hay más de 200 cargos políticos ocupando su sillón en los órganos de Gobierno de las Cajas.

Dos años después de que se iniciara la reestructuración del sector financiero en España en julio de 2009, y apenas uno después de reformar la **Ley de Cajas**, seguimos en las mismas.

Los políticos siguen enquistados en los consejos de administración de estas entidades. Y no lo hacen por amor al arte. Cobran por ello dietas que rondan en algunos casos los 20.000 euros anuales, simplemente

por el hecho de asistir a la asamblea general, generalmente un par de veces al año.

Este chollo, en teoría, iba a tener los días contados cuando el gobierno de **José Luis Rodríguez Zapatero** reformó la **Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA)**. Parecía entonces que todos tendrían que levantarse de la silla y cederla a nuevos miembros, más profesionalizados y en teoría, más despolitizados.

Pero eso no ha sucedido, entre otras cosas, según explican los expertos, porque la norma finalmente quedó descafeinada, ya que solamente exigía que al menos la mitad de los miembros del Consejo de Administración reuniesen "especial cualifica-

ción" y reducía del 50% al 40% la representación política máxima en los órganos de gobierno. Una reducción que a la opinión pública les sabe a poco, sobre todo, teniendo en cuenta el nuevo papel que están llamadas a desempeñar las Cajas, que básicamente se reduce a la gestión de la **Obra Social**, máxime cuando ésta también se está viendo reducida en el conjunto del sector.

"La Obra Social al final se va a quedar para pagar las dietas y completar el sueldo de concejales, alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales o procuradores en las Cortes regionales", explica un analista, que asegura que no se ha perseguido con suficiente ahínco por parte de los gobernantes el hecho de poner fin al

reparto de prebendas entre los partidos políticos. En teoría, las fusiones deberían haber reducido no sólo las plantillas, sino también las cúpulas, pero la fórmula de SIP o fusión fría permite mantener su estructura a las Cajas. Además, la Ley da un periodo de transición, de tres años, para que estos cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas salgan de los órganos de gobierno de las Cajas, con lo que todavía les quedan otros dos años para acomodarse. Un periodo demasiado largo, a juicio de los expertos, cuando precisamente España está siendo castigada en buena parte por la fama que se han ganado las Cajas de Ahorros gracias a la politización de sus gestores.

El máximo exponente de este fenómeno es **Bankia**. Cuando se presentó públicamente la entidad, el organismo de Gobierno se compuso con diez miembros vinculados al PP, cinco vinculados al PSOE, dos a Izquierda Unida, dos a la patronal madrileña CEM y uno a Comisiones Obreras (CCOO). Con la entrada de **José Ignacio Goirigolzarri**, todos han salido del banco y han sido sustituidos por profesionales, pero no todos lo han hecho de las Cajas que la forman.

El primero que sigue cobrando dietas de Caja Madrid es su presidente, **Rodrigo Rato**. El Gobierno consiguió echarlo de Bankia, pero no de la Caja madrileña. "Resulta increíble como Rato puede todavía seguir en la entidad con todo lo que ha provocado y el daño que ha hecho a los españoles", señalan fuentes del sector.

Sálvese quien pueda

Antes de que Luis de Guindos anunciase que los "hombres de negro" iban a aterrizar en las Cajas de ahorros, los principales partidos ya habían movido ficha rápidamente para colocar a los suyos. De hecho, hace apenas tres meses, en marzo, se confirmaban tres nuevos nombramientos de perfil político en **Cibeles Corporación Financiera**, la corporación industrial de la entidad presidida por Rato: **María Enedina Álvarez** (PSOE), **José Ricardo Martínez Castro**, líder de UGT en Madrid, y **María Del Carmen Cafranga Cabestany**, empresaria vinculada a los populares.

Un poco antes, a finales de enero, se votaba en el **Ayuntamiento de Madrid** el nombramiento de consejeros delegados para **Caja de Badajoz**. La renovación de esta entidad era una oportunidad para el Partido Popular, que ha conseguido aumentar su influencia y poder sobre la Caja una vez ganadas las elecciones autonómicas en Extremadura. Una votación duramente criticada desde **UPyD**, el partido de **Rosa Díez**, que tiene en la despolitización de las Cajas uno de sus principales objetivos, según explican en esta formación política.

Se dan casos como el del presidente de la Diputación de Ávila, que sigue siendo el presidente de Caja Ávila y además, dirige la Comisión de Retribuciones

Sin salir de las Cajas que forman Bankia, destacan casos llamativos como el de **Agustín González**, actual presidente de **Caja Ávila**, que todavía sigue en el cargo y se lleva a su bolsillo 224.000 euros anuales por este concepto. Lo curioso del caso es que también es presidente de la comisión de retribuciones, con lo que él es quien decide su propio salario.

Sus funciones no acaban ahí, porque González también dirige la comisión de Obra Social, que es la que elige los proyectos que patrocina la Caja, la comisión ejecutiva y a su vez, es alcalde de un municipio y el presidente de la Diputación de Ávila. Casos como éste son una muestra de la clase de gestores que, todavía hoy, pueblan los órganos de gobierno de las entidades de ahorros españolas.

No obstante, no todas las Cajas de ahorros están politizadas. Así, las vascas y la aragonesa **Ibercaja**, por citar dos ejemplos, han estado gestionadas en su mayoría por profesionales. La menos politizadas con **Laietana** y **Caja Rioja**. En esta última hay sólo 15 políticos en una asamblea de cien personas.

La familia del PP se va de Bankia, pero Rato resiste en Caja Madrid

■ El ex ministro de Trabajo y portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, **Valeriano Gómez**, tiene razón cuando dice que el listado de los selectos parientes ejecutivos con carné del PP en **Bankia**, **Caja Madrid** y las sociedades participadas es amplísimo. La lista empieza por el primo de **Esperanza Aguirre** y exdelegado de Merrill Lynch en España y Portugal, **Claudio Aguirre Pemán**, y continúa por **Nieves Alarcón Castellanos**, esposa del

exsecretario general del PP madrileño **Francisco Granados**, nombrada en el año 2008 consejera de Caja Madrid Pensiones, empresa participada por Bankia. Pero hay más: **Carmen Cavero Mestre**, cuñada de **Ignacio González**, vicepresidente del Gobierno de Aguirre y candidato de ésta a presidir Caja Madrid. Cavero es vocal del Consejo de Caja Madrid **Cibeles** y consejera de Bankia con un sueldo de unos 150.000 euros

anuales, gastos de representación y coche oficial. En total, los miembros del Consejo de Caja Madrid se repartieron una remuneración de 1,6 millones en 2011. Pero además, el otro órgano de gobierno de la entidad, la Asamblea de Caja Madrid, es una de las más numerosas, con 343 personas, de las que 80 son representantes elegidos por el Ayuntamiento que lidera ahora **Ana Botella** y otros 53 más por la Comunidad

de Madrid, sin olvidar tampoco a los 36 representantes sindicales. Un pastel demasiado suculento para dejarlo pasar. Tampoco parece que, de momento, vaya a dejar la presidencia de la Caja madrileña **Rodrigo Rato**, siguiendo el ejemplo del que fuera vicepresidente de Bankia, **José Luis Olivas**, que permaneció en **Bancaja** un tiempo después de haberse conocido que había hundido la entidad y su filial, el **Banco de Valencia**.

La Caja valenciana tampoco se queda atrás en lo que respecta a la integración de políticos en sus filas. La mitad de las 196 personas que integran su asamblea son políticos: 50 representantes de las corporaciones municipales y otros 49 más de la **Generalitat Valenciana**. Y en el Consejo de Administración de la entidad ocurre exactamente lo mismo. Hay 20 miembros y 10 son o han sido cargos políticos electos.